



Comunicado Público: Colombia cercada por el paramilitarismo ¿Y el Estado?

Medellín 2 de octubre

Desde el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías para la Labor de Lideresas, Líderes, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, manifestamos nuestra preocupación por el silencio y la persistente omisión del Estado colombiano, que se parece por igual a la ineptitud, la connivencia y la complacencia que sigue dando vida al paramilitarismo en todo el país.

Cómo hemos denunciado recurrentemente en nuestros informes, la presencia paramilitar se constata en los 125 municipios del departamento de Antioquia, que más allá del estar allí, constituye la imposición de dinámicas sociales, económicas, políticas, la imposición de un cogobierno terror y violencia.

El día de ayer en 10 departamentos, zonas urbanas y rurales de más de 70 municipios amanecieron pintadas múltiples paredes, vías y vehículos con grafitis alusivos al grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC. Claramente se trató de una acción coordinada para sembrar terror y demostrar poder, acompañada con la persecución, la censura, la activación de un plan armado y sistemático con el que nos regresan a la violencia.

Denunciamos y hacemos pública nuestra preocupación por las poblaciones sometidas ante la presencia paramilitar, pero también porque las personas que defendemos los derechos humanos hemos sido especialmente vulnerables. La cifra de agresiones en nuestra contra en Antioquia siguen escalando; según el Observatorio sobre el Nivel de Riesgo a la Labor de los Defensores/as de DDHH de Antioquia de la Fundación Sumapaz y la Corporación Jurídica Libertad, entre enero y Agosto del 2020 se han presentado en Antioquia más de 34 amenazas individuales, 17 Homicidios contra personas defensoras de derechos humanos, 12 amenazas colectivas, 11 desplazamientos forzados, 5 agresiones individuales, 4 atentados, 3 desapariciones forzadas contra líderes/as y cerca de 277 eventos de violencia contra la población.

La prolongación impune del paramilitarismo sigue siendo el principal factor de la violencia sociopolítica del país, no percibimos una intención del Gobierno de Iván Duque, la Gobernación de Antioquia ni de las demás autoridades del Estado para contener o repeler la imposición de las armas contra la población.





Como parte del movimiento de derechos humanos condenamos la omisión gubernamental que nos obliga a asistir a la repetición de la violencia sociopolítica y la dictadura de la muerte con la que se acalla las voces desesperadas que exigimos con urgencia la paz.

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha documentado la *AT 016-18*, *ATI 029-18*, *AT 002-19* y *AT 004-2020* para demostrar el nivel de riesgo de existente para los municipios del Norte de Antioquia, así mismo, en el Bajo Cauca *AT No. 020-19*, *ATI 009-2018*, *ATI 027-18*, *AT 031-18*, *ATI 003-19* y *AT 045-2020*; en Urabá *AT N°048-18*, *AT 011-2018*, *AT 008-20*, *AT 014-20*, en Medellín y Bello *ATI 041-18*, *ATI 059-18*, *AT 039-29*, *AT N° 032-20*, Nordeste la *ATI 052-18*, Occidente *017-18*, y Suroeste la *AT 044-20*. Todas ellas denuncian la recurrente consumación de los niveles de riesgo y mencionan las dinámicas históricas de un paramilitarismo que durante décadas sigue desangrando al país con la total permisividad de los organismos del Estado.

Desde la sociedad civil responsabilizamos al Presidente Iván Duque y al Gobernador de Antioquia Luis Fernando Suárez Gobernador de Antioquia por su evidente papel de omisión que fomenta la violencia sistémica, la violación y vulneración a los derechos humanos en cada rincón del país.

Hacemos un llamado de urgencia al Ministerio Público para que realice el control necesario a una institucionalidad que se sigue negando a atender una crisis humanitaria ampliamente advertida.

Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
Proceso Social de Garantías para la Labor de las y los Defensores de
Derechos Humanos

